

El señor *La Torre González*.—Cuando se escuchan, Excmo. señor, tan bellas razones, como las expuestas por el honorable Senador por Arequipa, no puede uno menos que inclinarse á participar de sus opiniones; pero cuando se tiene el convencimiento práctico de que todo ello dista mucho de lo que pasa en realidad en la República, no puede uno menos de dolerse de que se den leyes solamente por hermosos discursos.

El honorable señor Rosas nos afirma con franqueza que sus informes son enteramente desfavorables á las Juntas Departamentales. Contra esto arguye su señoría diciendo: démosles atribuciones, démosles vida propia, démosles facultades, y entonces se salvarán las juntas departamentales y municipales; pero no tendrán nunca aquellas atribuciones que tuvieron los concejos, y si con todo ese gran poder murieron éstos, porque fueron una institucion inaplicable y por que esas atribuciones puestas en manos incapaces para manejarlas, dieron por resultado la muerte de los concejos, muerte proclamada por todo el país en masa, antes de que el legislador hubiese derogado la existencia de aquellos, ¿qué razon hay ahora para que á las juntas departamentales se les confiera las mismas atribuciones, que tuvieron los concejos?—Ninguno Excmo. señor.

Cuando el país abrumado con los abusos y desórdenes cometidos por los concejos departamentales, cuando de hecho se trajo la revision de los actos municipales al Gobierno, ¿han tenido acaso lugar todos esos inconvenientes que nos pintan? No, Excmo. señor; los inconvenientes resultarían, si la revision fuese á manos de los concejos departamentales, porque, como lo ha expuesto el honorable señor Rosas, estas juntas no funcionan: son entidades en el nombre.

Para que se vea que el inconveniente no es puramente una objecion imaginaria, podemos examinar lo que pasa en la misma capital de la República. Compárese lo que es la entidad de la Junta Departamental con la del Concejo Provincial y dígame, si la Junta Departamental puede revisar nunca los actos del Concejo Provincial; pues bien lo que sucede en la capital de la República, sucede en cada uno de los departamentos, y suponiendo que existan las Juntas Departamentales, que funcionan regularmente, nunca serán entidades capaces de revisar los actos

de un cuerpo mas numeroso, como es el Concejo Provincial.

Las juntas se forman nombrándose un miembro por cada uno de los distritos de las provincias y como es un puesto que no presenta aliciente ninguno, se concede al primero que lo solicita, aunque no sea conocido en la provincia. Esta es la verdad práctica de la formacion de las juntas departamentales, y á una corporacion de este género queremos conceder la tremenda facultad de revisar los acuerdos de los concejos provinciales?—No lo juzgo prudente.

El honorable señor García Calderon decía: hemos muerto á las Juntas Departamentales, porque las creamos sin darles rentas; pues ahora vamos á matar á los concejos provinciales, encomendando la revision de sus actos á corporaciones que no podrán durante muchos años tener una vida propia.

Si pues los antiguos concejos departamentales murieron en fuerza de su impracticabilidad; si se suprimieron, porque resultaban inútiles, y si desde la supresion de los concejos departamentales y aun antes de que estos existieran, el Gobierno ha sido el revisor de las municipalidades; no veo razon para que volvamos á los antiguos tropiezos, confiando esa facultad á estos nuevos concejos, que con nombre distinto ejercen las mismas atribuciones.

Hoy les confiamos la revision de los actos de los concejos provinciales y poco á poco se les irá dando funciones nuevas, incompatibles quizá con las de su institucion, hasta convertirlos en verdaderos concejos; pero como no podemos tener tales concejos, lo que haremos sera embazarar el servicio municipal y concluiremos por matar á las municipalidades. Estoy, pues, por que debemos atenernos á la revision del Gobierno.

En este estado, S. E. levantó la sesion por ser la hora avanzada, quedando con la palabra el honorable señor Villanueva.—Eran las 6 p. m.

Por la redaccion—

J. OCTAVIO DE OYAGUE.

17.ª sesion del Lunes 18 de Agosto de 1890.

(Presidencia del H. Sr. Candamo.)

Abierta la sesion con asistencia de los SS. Senadores: Quifiones, Ibarra,

Elguera, Soler, Rosas, Bambarén, Samané, Torrico, García Calderón, Recabarren, Delgado, Carranza, Morote, Lama T., García, Villanueva, Alarco A., Mujica, Castillo, Torres, Menéndez, Alarcó L., Muñoz, Villagarcía, Leon, Olavegoya, Cárdenas, Izaga, Arbulú, La Torre González, Cisneros, Ganoza, Caneyaro, Revoredo, Najar, Lama G., Varela y Valle, Velez, Seminario, Montero, Eguiguren, Ocampo, Valdez, Forero, Ward, Pinzas y Vizcarra secretarios, fué leída y aprobada el acta de la anterior.

Se dió cuenta de los siguientes documentos:

Oficios.

Del señor Ministro de Gobierno, participando que para emitir el informe que se le ha pedido en el proyecto sobre amnistía, se ha dispuesto oír previamente á la Corte Superior de este Distrito Judicial.

A conocimiento del señor Arbulú.

Del señor Ministro de Hacienda, manifestando el motivo por el cual no remite inmediatamente los datos solicitados por el señor Pinzas, sobre pago de pensiones de viudas é indefinidos, é indicando que se ha ordenado mientras tanto poner á disposicion de los HH. Representantes los libros de la cuenta.

A conocimiento del señor Pinzas.

Del Sr. Ministro de Justicia, comunicando que se ha pasado á la Corte de este Distrito Judicial, el oficio que se le dirijió señalando las demas personas comprometidas en el atentado del 13 de Julio último; á fin de que obre en el juicio que se sigue á sus autores y cómplices.

Al archivo.

De los señores Secretarios de la H. Cámara de Diputados, recomendando á indicacion del señor Nadal, el preferente despacho del proyecto venido en revision sobre establecimiento de un colegio de instruccion media en Urubamba.

Al archivo te niéndose presente.

Antes de la orden del dia, el Sr. Cárdenas pidió que, con acuerdo de la H. Cámara, se oficiase al señor Ministro de Gobierno, para que remita copia autorizada del Supremo Decreto de 1.º de Enero último, por el que se aceptó la transferencia que de sus puentes derechos sobre la empresa del ferrocarril de Océro de Pasco, hizo la casa de Grace al comité de Tenedores de Bonos, y copia tambien de la escritura celebrada el 17 del mismo mes entre la dicha casa y el expresado comité de Tenedores.

Hecha la consulta respectiva, la H. Cámara así lo acordó.

El señor Pinzas pidió que por Secretaría se oficiase á la H. Cámara de Diputados para que se ocupe de desduchar el proyecto que en la Legislatura de 1887 se le pasó en revision sobre el abono á la comision geográfica que marchó del Perú á estudiar nuestras fronteras con el Ecuador y los descubrimientos hechos por el General Proaño en aquellas regiones, en cuyo expediente administrativo está reconociendo ese crédito por el Gobierno y por esta H. Cámara.

Así se dispuso.

ORDEN DEL DIA.

S. E. sometió á la sancion de la H. Cámara, las siguientes alteraciones hechas en el cuadro de comisiones, ya aprobado.

Comision Auxiliar de Legislacion.

Sr. D. Emilio Forero
« « Fernando Morote
« « Felipe Varela y Valle

Comercio é Industria.

« « Elias Mujica
« « Juan Revoredo
« « Agustin de la Torre Gonzalez

Justicia y Culto.

« « Pedro A. del Solar
« « Gervasio Arbulú
« « Ramon Delgado

Mineria.

« « Andres Menendez
« « Manuel Isidro Cisneros
« « Domingo Olavegoya

Presupuesto.

« « Francisco de P Muñoz
« « Adrian Ward
« « Agustin Ganoza
« « José Gervasio Arbulú
« « Celso Bambaren

Fueron aprobados.

Continuó la discusion del artículo tercero del proyecto venido en revision sobre reforma de la ley orgánica de Municipalidades, cuyo tenor es el siguiente:

« Artículo 3.º Los Concejos Provinciales inspeccionan y vigilan los procedimientos de los distritos, y conocen en revision de las resoluciones de estos, y el Supremo Gobierno sobre los de aquellos.»

El señor *Presidente*.—Continúa la discusion del proyecto del Ejecutivo,

reformatorio de la ley orgánica de municipalidades. Tiene la palabra el H. Sr. Villanueva.

El señor Villanueva.—Excmo. señor, deseo simplemente hacer algunas ligeras rectificaciones á los conceptos emitidos por el H. Sr. La Torre González y el H. Sr. Rosas, respecto de las Juntas Departamentales, contra cuya existencia y atribuciones me parece que se han pronunciado; y deseo que en la H. Cámara no quede tan desfavorable impresión en cuanto á esa institución que, á mi entender está llamada á producir los mas benéficos efectos con tal que se la sostenga en condiciones de llenar su fin.

Dijo el H. Sr. La Torre González que se habían suprimido los antiguos Concejos Departamentales, no solo porque la ley los extinguió con buenas razones, sino porque su propia naturaleza y el numeroso personal de que constaban, se habían hecho insostenibles, y que era absurdo pretender restablecerlos, cuando las circunstancias que los hicieron imposibles no habían variado. Agregó que era mucho mas grave todavía, conferirles la atribución de revisar los asuntos en que entendían los Concejos Municipales.

Siento que el H. señor Gonzalez haya visto tan á la ligera la semejanza entre una y otra institución, pues no puede ocultarse á su clara inteligencia que los antiguos Concejos Departamentales no estaban limitados á ejercer ciertas funciones, relativas á la administración contenciosa de las municipalidades; esas corporaciones ejercían atribuciones orgánicas de las municipalidades, compartiendo esas atribuciones con las corporaciones inferiores; de tal manera que abrazaban en toda su extensión las que correspondían á las municipalidades.

Las Juntas Departamentales, si se aprobara el artículo en debate, no ejercerían las atribuciones de los Concejos Departamentales, porque su acción quedaría limitada tan solo á lo que la comisión ha propuesto: resolver los conflictos y competencias que se susciten entre los Concejos Provinciales ó entre éstos y los particulares; no tampoco en todos los casos, sino cuando los Concejos Provinciales ó particulares denunciados soliciten la revisión de esas resoluciones. De tal manera que entre una y otra institución hay una diferencia sustancial en sus atribuciones.

Por otra parte, los Concejos Departamentales se componían de un

numeroso personal, que no existía en muchos pueblos, porque no estaban preparados para formar una institución, que demandaba una gran cantidad de ciudadanos de no escasa importancia intelectual y moral. No sucede lo mismo con las Juntas Departamentales, cuyo personal es reducido y no hay inconveniente para encontrarle en los pueblos, porque no pasan de ocho ó diez individuos los que componen las Juntas Departamentales; de manera que este otro inconveniente desaparece también.

En cuanto á la mala impresión que tiene el H. señor Rosas, respecto de las Juntas Departamentales, me parece que Su señoría no se ha detenido en examinar las causas ó motivos que hacen surgir inconvenientes para la marcha regular de las Juntas Departamentales y las causas porque no concurren á cumplir sus deberes.

Si su señoría se hubiera detenido en este examen, habría dicho á las personas que le informaban sobre la ineficacia de las Juntas Departamentales que esos inconvenientes provienen exclusivamente de los pueblos.

No se reúnen las Juntas, porque los Prefectos no las convocan y los reglamentos interiores no determinan, ni la ley misma, si deben reunirse con convocatoria ó sin ella. Hasta ahora están limitadas á la convocatoria de los Prefectos y si ellos no la inician no se reúnen.

Los Prefectos no quieren convocar á las Juntas, porque encuentran entorpecida por ellas la manera discrecional como administran las rentas. Para los Prefectos son atribuciones principales solicitar autorización para emprender gastos de refacción del local, lo que muy pocas veces se realiza.

Las Juntas Departamentales quieren fiscalizar esos gastos y si no los encuentran necesarios se oponen: hé allí el origen de un conflicto que surge entre la Junta Departamental y el Prefecto.

Los prefectos quieren emprender gastos para la compra de mobiliarios, por que parece que no les gusta ocupar los mismos muebles que su antecesor, no se les concede por las juntas la autorización respectiva; este es otro desacuerdo.

Las juntas departamentales quieren vigilar que las fuerzas de policía sean reales, efectivas, que no haya altas supuestas y de aquí nace otro inconveniente. Los prefectos quieren no encontrar inconvenientes, para poner en práctica esa infuente invención

de la Policía secreta, y digo infuza invencion, porque pocas veces efectiva en los departamentos; en algunos casos es innecesaria y en otros causa daño al mismo prefecto. Cuando éste es un hombre probo, se crea sombras, porque como es tan secreta esa institucion, nadie sabe si se pone en práctica ó nó. Por eso digo que es una infuza invencion.

Si las juntas departamentales estuvieran rodeadas de todas las condiciones que han menester, si las cualidades que deben tener sus miembros se determinan, prescribiéndose que deben reunir tales y cuales condiciones de probidad, inteligencia, posicion social y hasta propiedad, porque los propietarios deben tambien componer esas juntas, entonces creo que el personal de esas corporaciones, seria bueno; ejercería sus funciones con regularidad y los prefectos no tendrían inconveniente para realizar las que les corresponden.

Levantado ese cargo que se hace á las juntas departamentales, tal vez por malos informes; réstame suplicar á la H. Cámara que se sirva examinar el artículo 3º., porque lo he demostrado ya mas de una vez, la importancia de aprobar este artículo, está en que las juntas departamentales sean lo que deben ser y continuen ensanchando su esfera de accion descentralizadora, que es la aspiracion general.

En mi concepto, siguiendo este camino, no tardará mucho tiempo en que los departamentos tengan autonomia propia y puedan manejar por sí mismas sus rentas para vivir; de esta manera la marcha del país será un poco mejor de lo que hasta ahora ha sido.

El Sr. Rosas. Las palabras que acaba de pronunciar el H. Sr. Villanueva, me obligan á hacer una ligera esplikacion. Yo no soy enemigo de las juntas departamentales, al contrario, reconozco la necesidad de su existencia y deseo vivamente que mejoren de condicion; de modo que lleguen á satisfacer cumplidamente todas las necesidades para que fueron creadas. Tampoco parece que han sido inexactas las noticias que me han dado sobre el estado de las juntas departamentales, por que las mismas palabras que acaba de pronunciar el señor Villanueva, manifiestan que los datos que he recibido son exactos.

Su señoría ha manifestado por qué se encuentran en estado deplorable las juntas y atribuye á los prefectos y á otras circunstancias el que las juntas no se reúnan á su debido tiem-

po en unos departamentos y en otros que no se reúnan jamas. Todo eso podrá ser verdadero; pero todo lo que acaba de decir su señoría confirma que las juntas departamentales están poco mas ó menos en el deplorable estado que me han dicho se encuentran.

A lo que me oponia yo era que á estas Juntas, tales como estan constituidas, se atribuyese la facultad de revisar los actos municipales; y me oponia por la sencilla razon de que las creo incompetentes, por el modo como está organizado su personal, para atender á las necesidades vitales para que han sido creadas; de manera que si se les concede otras atribuciones, sin modificar de modo alguno su organizacion, esas Juntas se verán en situacion mas deplorable aun de aquella en que se encuentran ahora.

Nada de lo dicho aquí ha servido para modificar mi opinion, respecto á la competencia de las Juntas para revisar los actos municipales. Yo sigo creyendo que son incompetentes; pero no hago de esto cuestion de estado. Que los actos municipales sean revisados por los Prefectos ó por las Juntas Departamentales, presididas por los Prefectos, en el fondo es lo mismo. La única diferencia consiste en que el despacho municipal no tendrá la regularidad que hoy tiene, sin la intervencion de las Juntas Departamentales, porque, como esas Juntas solo se reúnen cuando los Prefectos quieren y, como en muchos lugares, casi no existe, es claro que esas revisiones se quedarán allí eternamente y los Concejos Municipales sufrirán mucho.

Como he dicho, no hago de este punto cuestion de estado; lo mismo es que revisen los Prefectos los actos municipales, oyendo á las Juntas Departamentales, ó que revisen éstas teniendo al Prefecto á la cabeza.

El punto sobre que debo llamar la atencion de la Cámara es: que me parece que algunas personas están imaginándose, que atribuyendo á las Juntas Departamentales la revision de los actos municipales, se perfecciona con eso la autonomia del cuerpo municipal. En mi concepto, éste es un grandísimo error y me parece que se forman esas personas una idea muy falsa de la autonomia municipal.

Un acto verificado por el Concejo municipal pasa á la Junta Departamental para que sea revisado; la revision se hace pronunciándose dicha Junta en tal ó cual sentido ¿La cuestion termina allí? No, porque si

el particular que ha exigido la revision ó el cuerpo municipal que la ha provocado no se conforma con la resolucion de la Junta, el caso va al Gobierno.

La municipalidad queda pues dependiente siempre del Gobierno como antes; hay un trámite mas, pero la dependencia es la misma. Con esto no adelantamos un solo paso en la independencia del poder municipal, porque la independencia de este cuerpo consiste en que los actos que verifica queden terminados en su seno; de manera que cuando un Concejo municipal haya pronunciado un fallo, no se tenga necesidad de la intervencion de otra persona.

Cuando se constituya un cuerpo municipal de tal naturaleza, que al adoptar una resolucion sobre determinado asunto, quede éste completamente fenecido, entonces se podrá decir que ese cuerpo es automático. A medida que avanza en ese sentido el concejo municipal, va perfeccionándose mas y mas y llegará al *maximum* cuando, como acabo de indicar, resuelva definitivamente los asuntos de su incumbencia sin tener en consideracion ninguna autoridad superior.

Por eso, si se quiere asegurar la independencia del cuerpo municipal, en lo que deben fijarse la Oámara y la Comision es: que las resoluciones que se refieren á asuntos municipales queden definitivamente concluidos en el seno de la municipalidad; á fin de que no haya necesidad de acudir á las juntas departamentales, ni al Gobierno. Ese es el modo de favorecer la autonomia municipal; y por eso encuentro que este artículo tiene un defecto gravísimo en el que es necesario que la comision se fije: (leyó)

Este artículo pone bajo la tutela de los concejos provinciales á los concejos de distrito, los priva de su autonomia y en seguida hace otro tanto con los concejos provinciales, poniéndolos bajo la tutela de las juntas departamentales. Los concejos de distrito están vigilados por los provinciales y éstos á su vez lo están por las juntas departamentales. ¿Dónde está pues esa famosa autonomia? No existe; solo cuando desapareza esa traba de la *vigilancia*, tendrán autonomia. Es necesario que los concejos de distrito no estén vigilados por los de provincia, ni éstos por las juntas departamentales, para que puedan tener autonomia; pero como el estado de atraso de nuestros pueblos no permite que esto suceda y es preciso que ciertos actos estén vigilados por las autoridades superiores,

lo que se necesita es que la ley, al indicar las diferentes atribuciones que corresponden á los concejos de distrito y á los de provincia, diga cuáles son aquellos actos que quedan definitivamente terminados en el seno de la entidad en que se practican y cuáles son las pocas resoluciones, susceptibles de revision.

Así se podrá dar independencia á los concejos de distrito y concejos municipales; pero quedando en la forma que actualmente tienen esos cuerpos la independencia es completamente ilusoria.

Pensar de otro modo es engañarse.

Yo querría que la comision y la Oámara se fijasen bien en este punto y sería muy conveniente que aquella se encargase del trabajo de indicar detalladamente todas aquellas atribuciones que las municipalidades pueden ejercer, sin que haya derecho á revision é indicar los pocos casos en que la revision es indispensable; pero dejar á los concejos de distrito bajo la vigilancia de los concejos municipales y en seguida los actos de éstos bajo la vigilancia de las Juntas Departamentales, es destruir la autonomia de dichos concejos.

Me parece, pues, que ese trabajo sería muy importante y convendría que se hiciera antes de discutirse las diferentes atribuciones que corresponden á cada uno de ellos.

Procurándose que el mayor número de actos, no sean susceptibles de revision, habremos establecido la autonomia de los concejos municipales y de distrito, y se habrá interpretado el deseo general de la Oámara; por eso no debe quedar el artículo en la forma en que está.

El señor *Canevaro*.—Me voy a concretar simplemente al punto de la revision. En la sesion pasada tuve ocasion de manifestar que creia inconveniente la revision por las Juntas Departamentales, que se iba a malograr esa institucion y que no se conseguiría ninguna ventaja.

Insisto en mi opinion, pronunciándome por el proyecto, en el sentido de que la revision sea hecha por el Gobierno.

Dejando el proyecto tal como está, el Gobierno tendrá que hacer esa revision directamente en la capital de la República, y en los departamentos por medio de las autoridades políticas que lo representan.

Si se dispusiera la revision por las juntas departamentales, ya se ha manifestado que en la mayor parte de los departamentos no existen esas juntas y se vá á hacer un daño

al encomendarles asuntos que no les competen, lo que dará lugar á desagrados desde el primer día, debiendo advertirse que por fortuna las corporaciones aludidas no han tenido motivo de ninguna especie para verse encontradas, y que hasta aquí se han estado mas bien ayudando recíprocamente en el desempeño de sus funciones.

Son muy pocos los lugares donde existen las juntas departamentales; en la mayor parte de los departamentos de la República, no han funcionado ni funcionarán antes de mucho tiempo. Los Prefectos, son en realidad, los que han estado ejerciendo la facultad de revisar los actos de los concejos municipales; y es mas conveniente á mi modo de ver, que sean los Prefectos los que desempeñen esta atribucion, para tener como hacérlos responsables de las medidas que dicte, infringiendo ó contrariando las disposiciones de los concejos, apoyados en sus leyes respectivas. Un gobierno tiene siempre mucho más cuidado, antes de dar un decreto ó resolucion; pero si se deja esa facultad á las juntas departamentales, vá á resultar que cada junta dictará en cada caso que se presente, la resolucion que juzgue mas acertada ó que mas cuadre á sus intereses. Así no será difícil que tengamos frecuentemente resoluciones contradictorias unas con otras, y con semejante sistema, se vendrá abajo la instruccion municipal. Si los concejos provinciales se avienen á la resolucion de la junta departamental, se formará una serie de administraciones distintas, contradictorias unas con otras; si no se avienen, si la junta departamental modifica por ejemplo, un presupuesto, mandado por el concejo provincial, llevará éste el asunto ante el gobierno, y solo se habrá conseguido que haya de por medio una rueda de más, trayendo el inconveniente de que la legislacion municipal no será una, sino completamente distinta en cada departamento.

Las necesidades locales pueden ser distintas; pero el respeto que se debe á la administracion suprema y á las leyes, no puede ser sino, uno y por eso digo que se vá á estar falseando la ley de distinto modo en cada uno de los departamentos; no habrá nada que pueda servir de termómetro y timon al gobierno; por eso me pronuncio en contra de la revision por la junta departamental.

El señor Valdez.—Excmo. señor.—Siento diferir completamente de la opinion de los señores que me han precedido en el uso de la palabra.

A mi humilde juicio no se trata en este momento de la autonomia de las municipalidades, sino simplemente de introducir reformas, que la experiencia viene manifestando al cuerpo legislativo que son necesarias. No sé hasta que punto se puede concebir la completa autonomia de los concejos municipales; ninguno de los poderes de la Nacion puede tener esa autonomia, es decir, la facultad de darse leyes propias y manejarse cada cual por sí mismo con entera independencia de los demas. Todos los poderes del Estado están sujetos á una pauta fija, están obligados á cumplir con sus respectivos deberes y no veo esa babilonia que teme el H. señor Oanevaro, porque evidentemente, sujetándose todos á las leyes tienen que proceder de idéntica manera.

En cuanto á aquello que se dice de que el gobierno continúa por medio de los Prefectos en la revision, no es exacto, porque hoy el gobierno no procede por los Prefectos, el gobierno revisa por propio derecho; porque se lo ha dado la ley. El gobierno revisa en tercer grado, cuando alguna de las partes no se conforma con lo resuelto; entonces apela á su autoridad y la ejerce aquel directamente; pero no podemos decir que revisa por el órgano de los Prefectos. Ahora se trata de hacer ese cambio, es decir que en vez de que el Prefecto revise los actos municipales, sean las juntas Departamentales las que desempeñen esta atribucion. Hé aquí para mí el punto principal de la cuestion. A este respecto, puedo asegurar que dichos actos estarán mejor revisados por las juntas departamentales, y voy á manifestar las razones en que me apoyo.

Ante todo es necesario que desaparezca esa triste idea de que no existen las juntas departamentales; si ese concepto fuera cierto, no habríamos podido tener á la vista los presupuestos de todas las juntas departamentales, lo que prueba la existencia de esas corporaciones, en todos y cada uno de los departamentos de la República.

En cuanto al departamento de Puno, puedo afirmar que esa junta se estableció á los ocho días de haberse dado la ley, y antes de quince días estaba aprobado el reglamento interior y sometido al gobierno; hoy viene satisfaciendo plausiblemente las necesidades de su creacion, porque hasta la fecha ha logrado que todas las matrículas de las provincias estén aprobadas. En una palabra vá cumpliendo con todos sus deberes. No digo que sea un modelo de per-

feccion en su género porque esa no la encontraremos en ninguna de las instituciones de la República; pero no es defecto de la ley el que hayan algunas irregularidades, mas bien puede atribuirse á la calidad de las personas. Tan cierto es ésto que he notado palpablemente que el cambio de dos ó tres individuos ha variado muchas veces por completo el aspecto y la marcha de una junta; verdad es que nosotros tenemos que perfeccionar esta ley de juntas departamentales, y tal vez sea la necesidad más urgente la de quitar á los prefectos la preidencia nala que se les ha dado, pues no siempre tienen los departamentos la fortuna de que un prefecto, al hacerse cargo de su puesto tome el mismo interés que los que viven allí y tienen vivo deseo de corresponder á la confianza pública.

Hecha esta digresion entraré á manifestar cuál es la razon que tengo, para que las juntas departamentales sean las que deban encargarse de las revisiones. Las juntas departamentales, Excmo. señor, tienen por la ley misma, dos sesiones semanales y cuando hay urgencia tienen sesiones extraordinarias. Si surge cualquiera dificultad en el cuerpo municipal, fácilmente se comprende que esas sesiones extraordinarias jamás se harán esperar, porque son cuestiones que nacen en el departamento y no pueden dejar de animar á los que allí viven para darles término; eso no pasa con los prefectos que tienen ocupaciones de otro carácter, y en cuanto á la misma revision, Excmo. señor, tenemos una amarga experiencia de que las que han pasado á los prefectos, han sufrido una demora considerable.

En una Junta Departamental existen los intereses de una provincia, pertenecen á ellas seguramente los vecinos, hijos de las demas provincias, que tienen positivo interés en servirlos y de corresponder á la confianza pública, así es que en una junta toman empeño para que se esclarezca una cuestion.

En cuanto á la incompetencia no puede haberla en un cuerpo colegiado, como sabe el H. señor Canevaro por el que tan dignamente preside. En una Junta Departamental existen tambien comisiones como en todo cuerpo colegiado, como sabe S. S.^a á las que se pasan los asuntos á fin de que los estudien y presenten á la Junta de una manera conveniente. Esas comisiones son tambien asistidas por individuos entendidos en el asunto, cuyo exámen se les ha encomendado, que no pertenecen á la cor-

poracion; de modo que una vez presentado el informe á la discusion, no puede dejar de resaltar la verdad; por estas consideraciones creo que no hay inconveniente para que la revision de los actos de los concejos municipales, se encomiende á las Juntas Departamentales, oyendo á los prefectos como sucede.

A este respecto recordaré al H. señor Canevaro, que cuando S. S.^a solicitó que se exonerara de las revisiones al Concejo Provincial de Lima y que éste se entendiera directamente con el Gobierno, creo haber cambiado algunas palabras con S. S.^a, manifestándole la necesidad de que se entendiera con la Junta Departamental por la mala impresion que causaría en los pueblos una excepcion. Yo no estoy por los privilegios, ni tratándose de las personas, ni de los pueblos; porque así como los derechos de los individuos, son iguales, los de los pueblos ante la ley.

El señor Valdéz.—No deja de ser chocante que la Municipalidad de Lima esté exceptuada, por solo estar en la capital, cuando la que está en la capital quizás necesita menos atencion que la de los pueblos apartados. La de aquí está á la vista de personas muy ilustradas, en medio de la prensa pública, así es que hay muchos motivos para que el cuerpo municipal se conduzca con mas tino; no así en los pueblos, donde pueden cometerse algunos abusos, que quizás demanden la atencion del Gobierno, si este fuera la áncora de salvacion.

Por eso estoy, ya que se trata de reformar la ley de Municipalidades, por que se haga de una manera general; una de las condiciones de toda ley es que tenga el carácter de general y no puede haber ley que rija de una manera para un pueblo y de distinto modo para otros. Por estas razones, me declaro en favor del artículo en debate, para que las Juntas Departamentales revisen los actos de los Cuerpos Municipales.

El señor Canevaro.—Voy á hacer una ligera indicacion. Yo no he tratado á las Juntas Departamentales como incompetentes para el desempeño de sus funciones; dije simplemente que no tendrían los conocimientos necesarios para la revision de todos los asuntos municipales.

Tambien se ha tocado otro punto que debo contestar y es: el referente á la ley especial para Lima. Yo creo que merced á esa ley es que existe el cuerpo municipal de Lima, porque si no se hubiese dictado, con conocimiento oportuno de las cosas que tenían que acontecer, ya habría

desaparecido el Concejo Provincial de Lima. No me cabe duda que se hubiera buscado un Prefecto *ad hoc* para salir de él y se habría conseguido el objeto fácilmente; pero esa ley obligaba al gobierno á dictar un decreto supremo, que podría haber traído al ministro que lo firmara al banco de los acusados. Fué pues dictada, repito, con mucha oportunidad.

El señor *García Calderón*.—Excmo Sr. el artículo que se debate es enteramente insostenible, porque atribuye la inspección de los Concejos de Distritos á los de Provincia y la inspección de los de Provincia al Supremo Gobierno.

Parece que todos los que han hablado sobre el asunto, están de acuerdo en que no se puede aceptar que las municipalidades lleven hasta el gobierno la revisión de sus actos, porque aparte de dañar el buen servicio, se recarga la administración pública y se hace difícil la administración municipal. Por esa razón estoy en contra del artículo en debate y estaré en favor del artículo 3.º de la Comisión; pero en ese hay que evitar la última parte, por que allí se dice que los Concejos de Distrito "serán vigilados por los de Provincia; éstos por las Juntas Departamentales y en caso de apelación se ocurrirá al Gobierno; por consiguiente no habremos hecho otra cosa que poner una rueda mas en el mecanismo municipal. Por eso estoy en contra del artículo que se debate y en favor del de la Comisión; pero quitándole la última parte, que somete al Gobierno la resolución definitiva de los asuntos.

El señor *Rosas*.—Oreo que sería conveniente que la Comisión retirase este artículo, para redactarlo en otra forma, porque las ideas que entraña, tal como está concebido, son enteramente contrarias á los deseos de la Comisión, la que me parece, según he oído decir á algunos señores, está por la autonomía, hasta donde sea posible concederla; y aquí como he manifestado queda establecida la servidumbre completa de unos Concejos á otros, lo que no juzgo conveniente.

Si desea la comisión, como parece que la Cámara también lo desea, que se aumente la independencia de que gozan en la actualidad los Concejos municipales, hay necesidad de darle otra forma al artículo en debate. Opino pues por que debe retirarse este artículo para que sea redactado, de modo que se consagre hasta donde sea posible la independencia de los concejos.

El señor *García Calderón*.—No po-

dria conseguirse ese objeto, retirándose el artículo, porque este es del proyecto del Gobierno y tenemos que rechazarlo ó aprobarlo; después entraremos en la discusión del artículo que lo sustituya; allí veremos lo que se puede hacer. Pero por el momento no se puede retirar ese artículo como lo indica el H. Sr. Rosas.

El Sr. *Forero*.—Si se procede de un modo distinto del señalado en el proyecto, no se llegará al mismo resultado que en él se indica. El artículo 3.º se compone de dos partes: una que dispone que los actos de los concejos de provincia y de Distrito sean inspeccionados y vigilados respectivamente por las Juntas Departamentales y por los Concejos de Provincia; y otra que atribuye al Supremo Gobierno, á las Juntas Departamentales y á los Concejos de Provincia, la respectiva revisión de las resoluciones de las Juntas Departamentales, de los Concejos provinciales y de los de Provincia.

¿Puede rechazarse la 1.ª parte, que ciertamente no constituye servidumbre odiosa, como se pretende, y, obedeciendo al principio que hoy domina en este género de materias, aprobar la 2.ª? Pero si se admite ésta, que es consecuencia de aquella, no veo inconveniente para que también se admita la primera. El artículo 3.º dice: (leyó)—Repito que no hay inconveniente alguno para que se efectúe la inspección y vigilancia que se indica en el artículo que acabo de leer, y mucho menos para que las Juntas Departamentales conozcan en revisión de las resoluciones de los Concejos Provinciales, y que las de aquellas sean revisadas por el gobierno.

La razón fundamental que se ha alegado es, que en el día las Juntas Departamentales no funcionan como es debido. Pero esa no es razón para rechazar una ley buena, sino para corregir los defectos que tenga la organización de las Juntas Departamentales; y puesto que la organización es mala, el Congreso debe ocuparse de corregirla. Si los mismos Concejos Provinciales nombran á los delegados que deben constituir dichas Juntas, es claro que desde que sepan que esos delegados tienen que ser jueces revisores de sus actos, en los casos que la ley determina, cuidarán de nombrar personas competentes, que posean conocimientos bastantes para la misión que se les confía. Por consiguiente, uno de los medios de dar á las Juntas Departamentales una vida nueva, ó de reanimar la que tienen, consiste en someter á su

revision, los actos de los Concejos Provinciales.

Además, esa revision no es absoluta; no se refiere á todos los actos que practican los concejos; están determinados en el artículo siguiente los que son susceptibles de revision. (leyó) Es decir, que ha menester que haya una infraccion directa y manifiesta de la ley, ó un ataque á un derecho, ó un procedimiento contrario á reconocidas conveniencias de los pueblos, para que las resoluciones caigan bajo el dominio de la revision. Las otras funciones de las municipalidades, que no son mas que el desarrollo natural de sus operaciones legales, no tienen por qué ser revisadas. Solo los interesados heridos por una infraccion de la ley, ó por un ataque al derecho que tienen, y los representantes de los pueblos, en el caso de que se atropellen sus derechos, podrán pedir la revision: lo único que se necesita es que el reglamento señale los casos en que debe tener lugar; por consiguiente, no hay razon para suprimir la revision de las Juntas Departamentales, y mucho menos para llevarla hasta el Poder Ejecutivo, porque esto será bueno para Lima, en que el gobierno se encuentra á media cuadra de la municipalidad; pero no para el concejo provincial del Cuzco, de Loreto ó de Obachapoyas, que cuando tengan que remitir los asuntos para que el Gobierno resuelva sobre la subsistencia ó insubsistencia de sus resoluciones, deben estar seguros que en mucho tiempo no conseguirán resultado alguno, y que en consecuencia la marcha de su administracion local se paralizará completamente.

Por estas razones, yo, que no puedo negar la revision de los actos que lastiman el derecho, atropellando leyes expresas y terminantes, y que no creo conveniente para los intereses de las localidades, que el gobierno sea quien venga, despues de un año, á resolver los asuntos; yo, que no convengo tampoco en el principio propuesto por el señor Rosas, de que la autoridad Prefectural sea la única que haga y deshaga en cuanto concierne á los concejos, prefiero que la revision de los acuerdos de los concejos de provincia, se haga por las Juntas Departamentales. Si esto ofrece inconvenientes, procuremos salvarlos, teniendo presente que uno de los medios de llegar á ese resultado, está en la misma ley que se discute.

Los Concejos Provinciales sabrán que su juez superior es la Junta Departamental, y por consiguiente enviarán al seno de ella, hombres com-

petentes, y en lo futuro no mirarán con indiferencia la organizacion personal de ese cuerpo.

En conclusion, Excmo. señor, propongo que se vote en tres partes el artículo: 1º la que trata de la inspeccion y vigilancia; 2º la que se ocupa de la revision de los actos de los concejos de provincia; y 3º la que somete esta revision al Supremo Gobierno. Rechacemos el último extremo y aprobemos el primero y el segundo, y quedarán salvadas todas las dificultades.

El señor Rosas.—Creo conveniente hacer algunas nuevas observaciones. El artículo tal como está concebido no dice lo que acaba de indicar el señor Forero. Aquí se abre la puerta de par en par, para la revision de todos los actos, no se hace excepcion de ninguna clase (leyó.)

Sería mejor que se estableciese una doctrina general, señalándose con precision los casos en que debe tener lugar la revision y no dejar esa vaguedad en el artículo, que parece autorizar á los Concejos Provinciales, para revisar lo que resuelvan los de distrito, y á las juntas departamentales para hacer otro tanto con lo que resuelvan aquellos. La ley conviene que sea clara, precisa y que el pensamiento del legislador se exprese en ella de una manera que no deje duda acerca de lo que prescribe.

En segundo lugar hay que tener en cuenta la significacion que se da á la palabra revision, pues no se sabe lo que significa en este artículo. ¿De qué revision se trata? Me parece que un señor Senador entendía que se trataba de una revision, á consecuencia de una queja entablada por un interesado ó algun miembro del Concejo, que no se conformaba con la resolucion que éste habia dictado, y preguntaba con motivo de la última parte del artículo, si cuando se conformara la municipalidad con lo resuelto por la junta departamental, estaría obligado un particular á conformarse tambien, porque aquí no se dice nada de eso. En el artículo parece que se da á entender que la revision no es otra cosa, sino un nuevo exámen del asunto, porque se supone que algun interés ha sido dañado. Pero no es esta la única significacion de la palabra revision; en todas las leyes del mundo tiene otra muy distinta.

Los casos en que los mismos miembros de una corporacion se quejen de lo resuelto por ésta, y pidan su revision son raros. El mayor número procede de distinta fuente.

Supóngase que se trata de un asun-

to grave, que tiene por ejemplo, una municipalidad una casa, que vale trescientos ó cuatrocientos mil soles y se le ocurre venderla. El Concejo resuelve que se venda en remate público, siguiéndose los trámites de reglamento; de modo que por esta parte no hay temor ninguno de que pueda haber fraude; pero una cosa de esa naturaleza en todas las municipalidades del mundo está sujeta á revision, va á manos de otra entidad, ya sea el Prefecto, el Gobierno ó otra autoridad, para que se vea si es conveniente que se realice. De modo que la revision no es la consecuencia de una queja, no lo es de un interés dañado, que levanta la voz pidiendo socorro, es la consecuencia de la necesidad que hay de que un acto gravísimo, que puede traer resultados serios para la poblacion, en cuyo nombre se va á ejecutar, sea examinado por otra persona, para que se ratifique si es conveniente ó no.

Esta es la significacion que tiene la revision en la mayor parte de las municipalidades del mundo: se revisan ciertos actos por su importancia ó gravedad, no á consecuencia de las quejas elevadas por particulares que han sido dañados.

Ahora se trata de saber qué clase de revision es ésta, y si es de esas que se piden por los interesados heridos. El proyecto no lo dice, y es necesario, repito, que se designen en la ley los casos en que la revision es de la naturaleza del que acabo de indicar, que es el mas importante de todos. Sucede muchas veces que un municipio tiene autorizacion del Congreso para hacer un empréstito; pero lo hace en condiciones tales ó cuales que pueden ser onerosas. Entonces es preciso que la operacion, aunque sea permitida por la ley, sea examinada por personas mas competentes, que no tengan interés especial para obligar á la corporacion á proceder en tal ó cual sentido. Esta es la principal revision, las otras son de menos trascendencia; pueden ser de una importancia relativa; pero en el mayor número de casos no la tienen.

Tambien hay que tener en cuenta, que en el mayor número de casos, es un inconveniente que el Gobierno ponga la mano en ciertos actos. Hay algunos en que no puede prescindir de hacerlo, y por eso la ley debe indicar cuáles son, ó lo que es lo mismo, qué revisiones deben ir hasta el Poder Ejecutivo; mientras no se haga esta separacion, la ley municipal será muy incompleta, y creyendo buscar una autonomia absoluta, nos encontraremos con una serie de incon-

venientes, que producirán una reaccion y harán que nos pronunciemos en contra de lo mismo que estamos buscando.

Oreo, pues, que debe variarse la redaccion, despues de estudiarse convenientemente la materia; y para ello lo mas prudente sería que volviera el artículo á la comision, para que lo presentase en armonía con las razones que se han alegado en el debate y de modo que correspondiera á las necesidades de nuestra situacion actual.

El señor *Lama G.*—El artículo siguiente satisface muy bien los deseos del H. señor Rosas.

El señor *Presidente.*—El señor Secretario va á leer, para ilustracion de la H. Cámara, los artículos referentes á la ley que está en vigencia.

El señor *García Calderon.*—Excmo. señor: Me parece que para proceder con toda la claridad correspondiente en este asunto, tenemos que ver que hay dos cuestiones capitales en el artículo 3º en conexion con el 4º, que no es sino el trasunto de la ley antigua. Una cosa es la vigilancia de los concejos de distrito por los de provincia, y otra muy distinta en inspeccion, á que se refiere el artículo 4.º Si á las Juntas departamentales se encomendase la inspeccion y vigilancia de los concejos de distrito, sería una funcion distinta de aquella á que se refiere el art. 4.º

Voy á expresar mis ideas como las he concebido. Teniendo las Juntas departamentales la facultad de inspeccionar y vigilar á los concejos de distrito, tendrán la mirada puesta sobre ellos y verán si alguna vez se han apartado de la ley. Cuando ésto suceda se opondrán á que se lleve á cabo el acuerdo, revisarán el asunto y lo fallarán.

Indudablemente que sería el mayor desideratum que los concejos provinciales y de distrito padieran marchar sin estorbarse y sin crear la anarquía ó la guerra civil. Pero podemos contar con que habrá un concejo de distrito en Miraflores, otro en Chorrillos, otro en el Barranco, que funcionen independientes del concejo provincial de Lima y que hagan allí todo lo posible por el adelanto de la localidad, sin la vigilancia de nadie? ¿Podremos á la vez conseguir en las provincias, fuera de la capital, municipalidades tales, que manejen rectamente los intereses públicos, sin que haya una autoridad que las vigile?

En principio la idea es magnífica; pero en la práctica es imposible su realizacion. Sin embargo, debe irse

procurando llegar á ella paulatinamente, amoldándose á las circunstancias; por consiguiente, debemos crear un orden de vigilancia que nos lleve á ese fin futuro, pero que no puede realizarse hoy.

Es preciso tener en cuenta las circunstancias especiales de la población, para la que se legisla. Si no podemos tener en ochenta y tantas provincias de la República otras tantas municipalidades perfectas que, como la de Lima, cumplan sus deberes sin necesidad de vigilancia, es claro que debemos someterlos á las circunstancias y dar á alguen la inspeccion y vigilancia sobre esas corporaciones. Dar esta atribucion al Gobierno es darla á los Prefectos, porque no pudiendo aquel ejercerla por sí, la encomendará á éstos. Los prefectos vigilarán, pues, á las juntas departamentales y éstas á las municipalidades é inspeccionándolas las convertirán en sus instrumentos, como está sucediendo, desde que tienen la facultad de revisar sus actos.

La segunda parte de la cuestion, consiste en saber cuáles son los actos que deben estar sujetos á revision. Si el acuerdo municipal no es más que la ejecucion de una ley, si se trata, por ejemplo, del remate de un ramo municipal, ¿qué necesidad hay de ocurrir á la revision; eso no necesita este trámite de apelacion, para que el acto produzca sus efectos.

Si fuera el caso el de vender bienes, como ha propuesto el H. señor Rosas, sabido es que los bienes nacionales, municipales ó de Beneficencia, no se pueden vender sino con autorizacion del Poder Judicial, probándose la necesidad y utilidad de la venta, y el expediente va gradualmente al Gobierno para que dé el permiso y se mande hacer la venta. Mayor garantía para este caso especial no la puede haber: existe ya en el Código Civil. Sucede lo mismo en otros casos de inspeccion. La municipalidad no podrá levantar un empréstito y cuando se presente el caso tendrá que seguir los trámites que designa la ley.

Lo más natural sería en los casos de inspeccion que ésta se hiciera por la minoría de la corporacion, su derecho consiste en inspeccionar y revisar los actos en que han sido vendidos y por último la revision por la Junta Departamental pondría término al asunto.

Quando llegue la discusion del artículo 1.º, veremos que ese artículo se ha ampliado, y discutiremos lo que convenga; pero al presente la cuestion queda planteada así: el artículo

3.º, tal cómo está en el proyecto del Gobierno y de la comision, contiene dos cuestiones capitales: 1.ª inspeccion y vigilancia; 2.ª revision de actos. Por mi parte, apesar de que hago profesion de principios liberales, me pronuncio en contra de la absoluta independencia de las municipalidades; necesitan revision y vigilancia y creo que esto se puede conseguir, dando la inspeccion á las Juntas Departamentales.

Estoy en favor de lo propuesto por la comision; pero quitándose la última parte; así queda completamente segregada la accion del Gobierno, excepto para aquellos casos en que tiene indispensablemente que intervenir, como para la venta de bienes.

Quando llegue el caso, modificaremos ó ampliaremos como mas convenga. Hoy solo vamos á votar dos puntos fundamentales, á saber, primero ¿es posible la existencia de esas municipalidades independientes? Si ó no? Me pronuncio en favor de las municipalidades, sujetas á las juntas departamentales; y segundo ¿son necesarias la vigilancia y revision para algunos actos? Indudablemente que sí.

Despues viene la especificacion de los actos no revisables y de los revisables. Entra desde luego en estos la revision de las juntas departamentales y la exclusion del Gobierno.

Sobre ese punto tengo que recordar lo que ha dicho el H. Sr. Canavaro: cree su señoría que de esta vigilancia y revision podría resultar una legislacion múltiple municipal, porque cada Junta Departamental daría resoluciones, segun su idea, y que muchas de ellas serían contradictorias con las que hubiese dictado otra corporacion igual en otro lugar, formándose un caos en dicha legislacion. Este conflicto me parece que no puede llegar nunca, porque es muy clara la ley de municipalidades, y teniendo todas que sujetarse igualmente á la ley de la materia, tendrán que estar siempre de acuerdo.

Habría variacion solamente en el modo de funcionar; cada municipalidad puede tomar un camino distinto, puede exigir determinados trámites, pero todas van al mismo fin. Precisamente esas es uno de los defectos de la descentralizacion: cada junta da su reglamento, segun las facilidades de la localidad y segun sus circunstancias, así es que no hay qué temer que se forme ese pretendido caos en la legislacion municipal.

Votemos simplemente la teoría: son ó no dependientes las municipa-

tidades de alguna corporacion; luego quién debe ejercer la vigilancia y quién debe ejercer los actos de revision. Despues vendrán, como cuestiones secundarias el modo de hacer la revision, cuales son los actos revisables y hasta que punto puede llevarse la inspeccion; pero sentemos ante todo los principios radicales. Mi opinion es que debe haber vigilancia, los concejos de distrito deben ser vigilados por los de provincia y estos por las juntas departamentales, que revisarán sus actos, salvo en aquellos casos en que las leyes han dado facultad exclusiva al Gobierno, como para la disposicion de bienes &c.

El señor *Rosas*.—Francamente que no sé á que atenerme respecto á las teorías que acaba de emitir el H. Sr. García Calderon. Su señoría está en favor de las municipalidades dependientes, se pronuncia contra la autonomia de las municipalidades y sin embargo quiere las municipalidades no tengan relación ninguna con el Gobierno, quiere reparar completamente al gobierno de toda intervencion en estas corporaciones. Francamente que no conozco municipalidad en el mundo, que haya llegado á ese grado de independencia, ni puedo conciliar las dos ideas, sobre las que ha discurrido el H. Senador por Arequipa. Partidario de un lado de las municipalidades dependientes, que estén vigiladas, que estén bajo la tutela; y de otro lado que el Gobierno no pueda intervenir de ninguna manera en el mecanismo municipal.

Francamente he tenido ocasion de estudiar y ver de cerca las municipalidades de los pueblos mas adelantados del mundo, de los pueblos en que las personas se encuentran en condiciones mas adecuadas para el gobierno propio, para dirigir sus asuntos, como Francia, Bélgica, Italia, Austria, Alemania é Inglaterra, donde existe la municipalidad mas independiente del orbe civilizado; el municipio inglés es sin duda alguna el que tiene mas autonomia; pero ni este mismo cuerpo está separada por completo del Gobierno. Hay ciertos actos municipales que se rozan con él y en que tiene que intervenir. Ni en Francia, ni en Bélgica, ni en Italia, ni en ninguna parte, tengo noticia de que exista una municipalidad sustraída del todo de la accion del gobierno.

Sería el último grado de perfeccion á que se podría llegar, y no sé cómo se pueda proponer que lleguemos á un golpe á la independencia completa

ta del poder municipal, sin que el gobierno tenga que intervenir por ningun motivo, cualquiera que sea el modo como se ejerzan las funciones.

Mientras tanto por, otro lado se proclama que no deben ser independientes, porque el estado de nuestros pueblos no consiente una municipalidad parecida á la inglesa, por ejemplo. Son evidentemente ideas contradictorias.

Si las municipalidades pueden ejercer una multitud de actos que interesan al orden público, y al país entero, cómo es posible que el gobierno se pueda desentender de lo que ellas hacen? Hay ciertos actos subversivos de las municipalidades, es que es necesaria la accion del gobierno. En Francia su intervencion es grandísima; lo mismo pasa en Italia y en otros puntos. Ahora bien, como podemos despues de proclamar nuestro atraso y de manifestar que necesitamos estar bajo una tutela, pretender que se llegue de una vez entre nosotros á la perfeccion, á que no ha podido llegar ningun pueblo, es decir, que las municipalidades marchen por sí solas, como si viviesen en una region independiente de la en que vive el gobierno.

Lo que debe procurarse es que la intervencion de éste no se ejerza, sino en aquellos casos en que sea absolutamente indispensable, pero hay algunos en que es necesaria para la salvacion de la sociedad.

El señor *Rosas*.—Una ley que se dictase en la forma que he indicado, es decir, poniendo á las municipalidades fuera de la accion del gobierno, estaría sujeta á muchos peligros, ofrecería muchos inconvenientes, sería imposible que se pudiera cumplir, el gobierno tendría que pasar muchas veces sobre ella para salvar los intereses públicos y es preciso que no se pongan las cosas en una situacion tan difícil.

Esa decantada independencia no la conozco, puede ser que llegue á existir en el curso de los siglos; pero hasta ahora es una idea de los utopistas y es imposible que nosotros, tan atrasados como estamos, lleguemos á ponernos á una altura á la que los mas ilustrados, experimentados y poderosos países de la tierra no han llegado todavía.

El señor *García Calderon*.—Me he maravillado de oír al honorable señor *Rosas* declarar que yo pido la autonomia de las municipalidades, cuando precisamente creo haber manifestado categóricamente y explícitamente que considero imposible, que ese gran

principio es inaplicable entre nosotros y que la ciencia de la política consiste precisamente en acomodar las teorías á las circunstancias de los pueblos.

Mas bien llama la atención ver á S. S., que ántes dijo que era necesario quitarle trabas á los pueblos en su administración, sostener ahora cosa contraria.

Yo no he dicho que quiero que las municipalidades sean independientes; no quiero realizar en el Perú una utopía, que no han podido realizar todavía los pueblos mas civilizados, ni quiero compararlo con los mas adelantados, porque yo no conozco su régimen municipal; pero estudiando en mis libros las teorías municipales he comprendido que son cuerpos, que no intervienen para nada en la política, mientras que entre nosotros han sido entidades *sui generis*, porque hemos hecho cuerpos medio administrativos, municipales y políticos.

Partiendo de esta base, he sostenido y repito que deseo que las municipalidades sean dependientes. La cuestión queda reducida á decir de quién dependen; ¿es del Gobierno ó de las Juntas Departamentales? Me he pronunciado contra la dependencia del Gobierno; pero esto no quiere decir que el Gobierno quede con las manos atadas: él tiene por la Constitución de la República el derecho de vigilar el cumplimiento de la ley. El Gobierno se dirige al Poder Judicial para pedirle el pronto despacho de la administración de Justicia, porque esa es una atribución general que tiene, porque es una garantía el cumplimiento estricto de las leyes y esa atribución general se extiende á todo; y aunque se diga que las municipalidades las vigilan los Prefectos ó las Juntas Departamentales, no por eso el Gobierno deja de tener expedita esa acción general.

Para el caso citado por el H. señor Rosas el Gobierno tiene, conforme al Código civil, la facultad de intervenir en las ventas de bienes municipales para que recargan pues la ley municipal con todo aquello que está diseminado en nuestros códigos?

El H. señor Rosas está de acuerdo conmigo en que no deben ser independientes las municipalidades.

La cuestión queda reducida, como he dicho, á saber de quién dependen. La dependencia del Gobierno ha probado mal, no porque el Gobierno haya dictado medidas arbitrarias, sino porque la distancia en que se encuentra de los extremos remotos de la República, hace dificultosa su ac-

ción; de aquí la necesidad de trasladar esa acción á las Juntas Departamentales, aunque los Prefectos presidan los acuerdos. ¿Qué inconveniente hay en esto? Van á ser inspeccionadas las municipalidades de distrito por las corporaciones correlativas de provincia y éstas por las Juntas Departamentales, para que cumplan la ley, para que respeten los derechos de las poblaciones y en fin para que llenen su misión debidamente.

Si yo hubiese dicho: quítese la vigilancia, queden las municipalidades libres de todo, con razón hubiera podido decir entónces el H. señor Rosas ¿cómo se viene á buscar esta gran perfección para el Perú, cuando ella no existe todavía en ninguna otra parte del mundo? Pero al concluir mi discurso dije: discutamos el principio, porque el artículo en debate contiene dos principios: la libertad ó sujeción, y la inspección de ciertos actos; despues discutiremos la persona que ha de ejercer estas funciones.

Véase, pues, que no se me puede tachar de contradicción en mis ideas, ni de que deseo una utopía para el Perú. ¿Cómo se conseguirá ese efecto? introduciendo en el mecanismo municipal á las Juntas Departamentales, y como éstas necesitan de este nuevo venero para tener vida, cada vez me afirmo mas en la idea de llamarlas para ejercer cierta autoridad de vigilancia ó inspección sobre todo el Departamento, puesto que lo representan ya en una de las partes mas vitales: la Hacienda.

Si por un lado vigilan y entienden en la distribución de los caudales públicos, y por otro en la distribución de los caudales municipales; no está fuera del objeto capital de las juntas departamentales esta inspección; lo estaría si tuviéramos que volver á los antiguos concejos departamentales; pero hoy es una institución completamente ajena al régimen municipal.

No hay, pues, nada inconveniente, ni contrario á los buenos principios en las ideas que he expresado, y no molestaré mas la atención de la honorable Cámara sobre esta materia.

El señor Rosas. — No sé como entender las cosas; parece que las palabras no tienen significación precisa. Acaba de decir el honorable señor García Calderón que es necesario que el Gobierno no tenga parte alguna en la ley municipal, que no figure esa palabra en ella; pero recuerda que el Gobierno, en virtud de las atribuciones que le concede la Constitución, puede intervenir.

Nadie lo niega; pero no se trata de eso, sino de una intervencion concedida por la ley municipal.

Esa intervencion existe en todas partes del mundo y yo desearia que el señor García Calderon encontrase por allí una ley municipal, en la que no estuviese determinada la accion del Gobierno, en asuntos relativos á las municipalidades.

En todas las leyes municipales se encontrará que hay cierto número de casos, en que el Gobierno tiene que intervenir en proteccion de los intereses generales del país, en proteccion del orden público etc. etc. De manera que nosotros formaríamos la excepcion al confeccionar una ley, como no existe en ninguna parte del mundo, y en cuyos artículos no aparece ni una sola vez la intervencion del Gobierno.

Contentarnos con la vigilancia de la Junta Departamental y creer que con esa vigilancia están salvados los intereses de la República, es una utopia.

No es una acusacion gratuita, lo que acaba de decir el señor García Calderon. No quiere que el Gobierno intervenga; dice que bastan las facultades que la Constitucion le otorga y que por consiguiente en la ley municipal el Gobierno no debe aparecer. Repito que esto es una novedad y una utopia.

Búsquese una sola ley municipal en que existe lo que pretende su señoría, y me doy por vencido.

El señor Forero.— Toda la discusion que ha tenido lugar, Excmo. señor, no destruye la esencia del artículo 3º que establece la revision de los actos de los Concejos Provinciales y de los concejos de distrito. En principio no podemos declarar que los concejos de distrito y de provincia son autónomos y que ellos resuelven todos sus asuntos de una manera definitiva y sin lugar á revision de ningun género, porque esto es contrario á los principios fundamentales del gobierno representativo.

Hay, pues, que establecer el principio de revision, y, bajo ese punto de vista, no podemos rechazar el artículo en debate, que se ocupa de establecer la inspeccion y vigilancia de los concejos de distrito por los de provincia; de los concejos de provincia por las juntas departamentales; y de éstas por el Gobierno.

Segun el carácter que vá tomando la discusion, veo que se atribuye á lo que se llama inspeccion ó vigilancia, un sentido mas extenso del que tiene. Inspeccionar y vigilar es es-

tuar, ó examinar lo que se ha practicado, para ver si es ó nó conforme con la ley. Esto no destruye la independencia del inspeccionado y vigilado cuerpo. Hay otra corporacion ó autoridad encargada de hacer el estudio de los actos de éste; y si encuentra que son contrarios á leyes expresas, ó al derecho de los ciudadanos, ó á las altas conveniencias del pueblo, entonces puede avocarse la revision, si la naturaleza del acto la permite. La inspeccion y la vigilancia no son, pues, la limitacion de la autoridad que se ejerce. Un individuo puede estar examinado, vigilado ó inspeccionado, sin que su libertad sufra la mas leve restriccion. Esas funciones son absolutamente indispensables para poder ejercer, en virtud del conocimiento que ellas inspiren, el derecho de revision. No descubro de qué suerte el artículo que se discute, estableciendo que las Juntas inspeccionen y vigilen á los Concejos Provinciales, y éstos á los de Distrito, limite la libertad de esos Concejos ni destruya su autonomia. Es una obligacion que se impone á los Concejos de estudiar y examinar los actos de los inferiores, para saber si en su oportunidad procederán á revisarlos, sea á solicitud de parte, cuando un derecho individual esté lastimado, sea de oficio cuando los grandes intereses de la localidad así lo exijan. Repito que el derecho de inspeccion y vigilancia no limita la autonomia del cuerpo inspeccionado y vigilado, sino que simplemente sirve para impedir que salga de la esfera de sus propias atribuciones.

En cuanto á la revision, me parece que no pudiendo establecerse Concejos Provinciales absolutos, tenemos que convenir en ella. Y ¿por quién debe hacerse respecto de los Concejos de Provincia?

Opinan unos que por las Juntas Departamentales, y otros que por el Supremo Gobierno. Yo insisto en creer que es mas natural y conforme con el carácter de nuestras instituciones municipales, que sean realizadas por las Juntas Departamentales. Si el Gobierno encuentra que estas Juntas han stropellado los derechos de los particulares que interponen ante él la queja correspondiente, ó que han lastimado los derechos de la poblacion ó del Departamento; entonces, á mérito de su inspeccion y vigilancia, podrá á su vez ejercer la revision del acto municipal.

Opino, pues, que el procedimiento gerárquico establecido en el artículo de la comision, es muy aceptable, y

que no se pueda rechazar del todo el artículo en debate, salvo que se haga con el objeto de ocuparnos de aquel; porque rechazar éste en lo absoluto, sería rechazar el principio de inspeccion, vigilancia y revision, que es la base de nuestro sistema de gobierno.

No creo, pues, que habrá inconveniente, como dije enantes, para que la votacion se divida en dos partes.

La primera dice: «Los concejos provinciales inspeccionan y vigilan los procedimientos de los de distrito, y conocen en revision de las resoluciones de éstos. Hasta allí no hay inconveniente en aprobar.

La segunda parte, que somete los actos de los concejos de provincia á la revision del gobierno, se puede rechazar, si llevamos el propósito de aprobar la segunda parte del artículo propuesto por la comision.

Si todas las autoridades que ejercen el poder municipal constituyen un orden gerárquico, no hay razon para romper este orden, y lo natural es que del concejo de distrito se pase al provincial, y de éste al departamental, que pide termine en el supremo gobierno, que es el representante de la nacion. En los diversos artículos que constituyen el proyecto de ley municipal y de que se ocupará más tarde la honorable Cámara, se indican los casos y la forma de la revision, disponiendo que el concejo procederá de tal modo y so meterá el acto á la revision de la junta departamental, ó directamente á la aprobacion del gobierno.

Por ejemplo: el presupuesto de rentas y gastos lo formula el concejo, segun la ley, y lo somete á la aprobacion del gobierno. En la ley modificada la comision propone se someta á la aprobacion de la junta departamental. Como en las diversas disposiciones del proyecto se indica el modo como se verificará la revision, insisto en que se apruebe la primera parte del artículo en debate, y se rechace la segunda, para aprobar la parte final del artículo propuesto por la comision.

El Sr. Presidente.—Antes de votar se va á leer el artículo, que se ha debatido y el que contrapone la comision.

El Sr. Secretario leyó.

El señor Forero.—Pido que la votacion se haga por partes.

El Sr. García Calderon.—Me parece mas difícil rechazar ese artículo y entrar en la discusion del que lo sustituye.

El Sr. Forero.—Retiro mi indicacion, pero reservándome el dere-

cho de sostener la primera parte del artículo tercero, caso de que se comitiese.

Después del debate, se procedió á votar el artículo y fué aprobado.

Se leyó y pasó en debate el que en sustitucion propone la comision.

El Sr. Rosas.—Pido, Excmo. señor, que antes de discutir este artículo, se mande á la comision para que le dé una forma conveniente. La última parte de ese artículo no puede estar peor redactada, autoriza para que el Gobierno intervenga en todas las revisiones, cuando en realidad no debe hacerlo sino en ciertos asuntos.

Por su mala redaccion se discutirá pues largamente, sin que llegue nadie á formarse una idea clara de la disposicion que contiene. Volviendo á la comision puede ésta, de hoy á mañana darle una forma conveniente, que facilite la discusion.

La comision retiró el artículo con el objeto indicado.

Después de lo cual, S. E. levantó la sesion, manifestando antes la necesidad de abrir las sesiones á la hora de reglamento, á fin de qué puedan ser resueltos los diversos asuntos de que ha de ocuparse la H. Cámara.

Eran las 5 y 30 p. m.

Por la redaccion.

J. OCTAVIO OYAGUE,

18.ª sesion del Mártes 19 de Agosto de 1890.

(Presidencia del H. Sr. Candamo.)

Abierta la sesion con asistencia de los SS. Senadores: Quiñones, Ibarra, Elguera, Solar, Rosas, Bamberén, Samanéz, Torrico, García Calderon, Recabarren, Delgado, Carranza, Morote, Lama T., García, Villanueva, Alarco A., Mujica, Castillo, Torres, Menéndez, Alarco L., Muñoz, Villagarcía, Leon, Olavegoya, Oárdenas, Izaga, Arbulú, La Torre Gonzalez, Cisneros, Ganoza, Oanevaro, Revoredo, Najar, Lama G., Varela y Valle, Velez, Seminario, Montero, Elguiguren, Ocampo, Valdez, Bejarano, Forero, Ward, Pinzas y Vizcarra secretarios, fué leida y aprobada el acta de la anterior con la aclaracion del señor Valdez, de que opinó en favor del artículo del dictámen, que establece la revision de los actos de los Concejos Provinciales por las Juntas de Departamento.

Se dió cuenta de lo siguiente: